LA CORTE CONSTATÓ LA EXISTENCIA DE COSA JUZGADA RESPECTO DE LA EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA DEL ART. 33 DE LA LEY DE FINANCIAMIENTO, QUE REGULA LA RENTA LÍQUIDA GRAVABLE DE LA CEDULA GENERAL, EN EL SENTIDO DE QUE SE APLIQUE A TODAS LAS RENTAS DE TRABAJO AUNQUE SE DERIVEN DE UNA FUENTE DISTINTA A UNA RELACIÓN LABORAL O A UNA SITUACIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA

IV. EXPEDIENTE D-13233 - SENTENCIA C-553/19 (noviembre 19)
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez

1. Norma acusada

LEY 1943 DE 2018
(diciembre 28)

Por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones

ARTÍCULO 33. Modifíquese el artículo Art. del Estatuto Tributario, el cual quedará así:

Artículo 336. Renta líquida gravable de la cédula general. Para efectos de establecer la renta líquida de la cédula general, se seguirán las siguientes reglas:

1. Se sumarán los ingresos obtenidos por todo concepto excepto los correspondientes a dividendos y ganancias ocasionales.
2. A la suma anterior, se le restarán los ingresos no constitutivos de renta imputables a cada ingreso.
3. Al valor resultante podrán restarse todas las rentas exentas y las deducciones especiales imputables a esta cédula, siempre que no excedan el cuarenta (40%) del resultado del numeral anterior, que en todo caso no puede exceder de cinco mil cuarenta (5.040) UVT.
4. En la depuración **de las rentas no laborales y las rentas de capital** se podrán restar los costos y los gastos que cumplan con los requisitos generales para su procedencia establecidos en las normas de este Estatuto y que sean imputables a estas rentas específicas.

2. Decisión

ESTARSE A LO RESUELTO en la decisión C-520 de 2019, que declaró exequible el artículo 33 de la Ley 1943 de 2018, *"en el entendido de que los contribuyentes que perciban ingresos considerados como rentas de trabajo derivados de una fuente diferente a la relación laboral y reglamentaria, pueden deducir, para efectos de establecer la renta líquida cedular, los costos y gastos que tengan relación con la actividad productora de renta"*.

3. Síntesis de los fundamentos

La Corte concluyó que el escrutinio judicial propuesto en la demanda de inconstitucionalidad no era procedente, por cuanto la sentencia C-520 de 2019¹ resolvió, con efectos de cosa juzgada, la controversia planteada en esta oportunidad.

En efecto, en el proceso correspondiente al expediente D-13106 se demandó, entre otras cosas, la constitucionalidad del artículo 33 de la Ley 1943 de 2018, por el mismo contenido normativo impugnado, esto es, por no haber hecho extensiva la facultad para deducir los costos y los gastos en la depuración de la renta, y que en cambio sí fue prevista para las rentas no laborales y las rentas de capital. En el presente proceso, los cuestionamientos recaen sobre la misma disposición, y sobre el mismo contenido negativo.

Asimismo, en ambos procesos los cargos de inconstitucionalidad se estructuraron a partir de los mismos referentes: primero, el principio de cosa juzgada constitucional, por haberse reproducido un contenido normativo declarado inexecutable en la sentencia C-688 de 2015 y por haber desconocido el condicionamiento introducido en la sentencia C-120 de 2018; y segundo, el principio de equidad tributaria, por haber prescindido de la capacidad económica para fijar las cargas tributarias de los trabajadores independientes.

Así planteada la controversia en el marco del expediente D-13106, el día 5 de noviembre de 2019 este tribunal resolvió, en la sentencia C-520 de 2019², *"declarar exequibles, por los cargos analizados en esta sentencia, los artículos 24 y 33 de la Ley 1943 de 2018, este último en el entendido de que los contribuyentes que perciban ingresos considerados como rentas de trabajo derivados de una fuente diferente a la relación laboral y reglamentaria, pueden deducir, para efectos de establecer la renta líquida cedular, los costos y gastos que tengan relación con la actividad productora de renta"*.

La Corte estimó que en las sentencias C-668 de 2015 y C-120 de 2018 se fijó un precedente claro e inequívoco, en el sentido de que es constitucionalmente inaceptable impedir la deducción de los costos y los gastos en que incurren los trabajadores independientes para obtener sus ingresos para calcular la base gravable del impuesto a la renta. En dichos fallos la Corte concluyó que esta restricción es constitutiva de una violación al principio de equidad tributaria en su dimensión vertical, respecto de los trabajadores dependientes que no deben incurrir en dichos gastos, y de una transgresión del principio de progresividad, en tanto desatiende la capacidad económica de dichos contribuyentes.

Con fundamento en la consideración anterior, la Corte concluyó que la facultad de deducción de costos y gastos prevista en el numeral 4 del artículo 33 de la Ley 1943 de 2018 para las rentas no laborales y las rentas de capital, debía hacerse extensiva a las rentas de trabajo originadas en una fuente diferente a la relación laboral o reglamentaria.

Así las cosas, en la medida en que la controversia planteada ya fue resuelta definitivamente en la sentencia C-520 de 2019³, la Corte debe estarse a lo resuelto en dicha providencia.

¹ M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

² M.P. Cristina Pardo Schlesinger.